

Original from my own

Dr. A. A. Lamburn.

RES AST

C4-6

34



Handwritten text, possibly a signature or name, in cursive script, located at the top of the page.

R. 920

R. 2.313

F. A. $\frac{3}{97}$

DEFENSA

DE LOS DERECHOS

DE

DON NICOLAS RIVAS Y OTROS

EN EL PLEITO

CON

D. ANTONIO MARIA ARGÜELLES

sobre restitucion de bienes, que fueron vinculados.



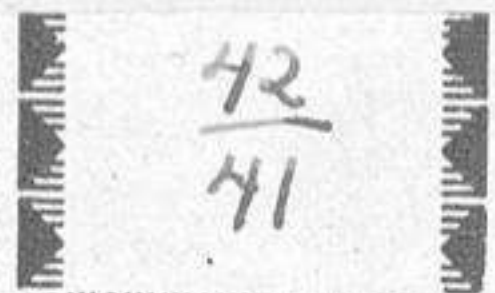
OVIEDO:

IMP. DE D. RAFAEL C. FERNANDEZ Y COMP.

Plazuela de la Fortaleza.

—
1863.

D 564038



42

41

ADVERTENCIA.

Lejos estaba de nuestro ánimo el publicar las alegaciones presentadas en defensa de los derechos de D. Nicolás Rivas y otros y contra la detentación de D. Antonio María Argüelles; pero nos vemos en ese compromiso por haber dado á la prensa el demandado las suyas.

Sin embargo de que bastaría la lectura del alegato que publicamos, incluyendo en él algunos párrafos de los escritos de primera instancia, para penetrarse de la cuestión y de los fundamentos respectivos, no estará demás que antes espon- gamos brevemente los hechos principales. Siempre hay algo que se omite en las alegaciones, porque consta en los docu- mentos aducidos.

Era poseedor D. Andrés Posada y Cangas de los mayorazgos instituidos por sus mayores, y, no satisfecho al parecer con su suerte, corrió en busca de otra mejor al Nuevo-Mundo, en donde contrajo matrimonio con D.^a Francisca Herrera y Salazar. Tuvieron por hijos á D. Miguel, D.^a Petrona y D.^a Lorenza: y, anheloso D. Andrés por volver á su pais natal, abandonó á su familia restituyéndose á Llanes, en donde falleció en el dia 1.^o de Febrero de 1776. Hizo testamento ante escribano de esa Villa, y en él declaró *estar casado en la Nueva España, provincia de Campeche y ciudad de Mérida*, con espresion del nombre de su muger é hijos (1). A ninguno podia ocultarse, por lo mismo, que el sucesor en los vínculos se hallaba en Ultramar. Sin embargo, D. Felipe Varela, como marido de D.^a Josefa Posada y Cangas, hermana de D. Andrés, pidió judicialmente la posesion de los

(1) Fólío 222 de la pieza principal.

vínculos, y la obtuvo. A su fallecimiento sucedióle su primogénito D. José Varela, contra quien promovió pleito uno de los descendientes de D. Andrés.

El hijo de este, D. Miguel, se habia casado con D.^a María de la Luz Esquivel (1), con quien hubo por hija única á D.^a María Tomasa, que nació en el dia 31 de Diciembre de 1761 (2). Y esta contrajo matrimonio con D. Diego de Castro en el dia 2 de Noviembre de 1786 (3).

Propuso demanda D. Diego *como marido y conjunta persona* de D.^a María Tomasa Posada y Esquivel, contra D. José Varela, y, esponiendo que su muger era *hija única y legítima de D. Miguel Posada y Cangas, hijo único varon primogénito de D. Andrés Posada y Cangas....., y por consiguiente ser nieta legítima del mismo, y siendo..... viznieta de D. Diego de Posada Gomez de Lamadrid, tercera nieta de D. José de Posada Rubin de Célis, y cuarta nieta de D. Diego Posada Pariente*, deducia que era *evidentemente legítima sucesora á los mayorazgos fundados por D. Andrés de Posada Pariente y su muger D.^a Maria de Posada sus quintos abuelos, y á los que asimismo fundaron Elvira Sanchez, viuda de Gomez Posada, y su hijo García de Posada Pariente, y D.^a María Alonso de Mendoza sus ascendientes, los cuales se declararon y liquidaron en el año de 1706 con motivo de la reparticion*

(1) Fóllo 213 vuelto de la misma pieza.

(2) Fóllo 215.

(3) Fóllos 34 y 214. Son dos las partidas de matrimonio, y en una de ellas aparece el nombre equivocado. Pero las de bautismo de todos sus hijos corroboran con la legitimidad de su nacimiento el hecho consignado, que fué además reconocido en sentencia ejecutoria.

convencional que por medio de jueces árbitros se ha hecho entre D. Andrés Posada Rubin de Célis—su tercer abuelo—y sus hermanos á testimonio de Domingo García Lopez. Solicitó que se declarase á dicha D.^a María Tomasa Posada y Esquivel legítima sucesora en los vínculos y mayorazgos de su casa y progenitores, y habérsele transmitido por ministerio de la ley (1). Alcanzó D. Diego el éxito que se proponía, declarándose á la D.^a María Tomasa Posada y Esquivel legítima sucesora de los vínculos y mayorazgos sobre que se siguiera el pleito, y fué condenado Varela á su restitucion con frutos y rentas desde que á su padre D. Felipe se le diera la tenuta. Se interpuso apelacion de esta sentencia, la cual fué confirmada por la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid en Diciembre de 1800 (2). Hubo mas de una dificultad para ejecutar esta Real sentencia, pero en el año de 1805 entró D. Diego de Castro, por medio de sus apoderados, en posesion de los vínculos (3).

Mas tarde, ora por los sucesos políticos que sobrevinieron, ora por otras mil causas que dificultaban las relaciones entre Méjico y España, D. Diego de Castro se encontró casi en la imposibilidad de utilizar los productos de sus bienes. Se lamentaba don Juan Dionisio de Posada Argüelles, en carta que le escribió á 9 de Setiembre de 1816 (4), de que sus rentas estaban siendo *presa de pícaros*; y, haciéndole ver que eran otras las circunstancias en que respecto de

(1) Fóllos 212 y 13 de la misma pieza.

(2) Fóllos 256 y 257.

(3) Fóllos 259 y siguientes de la pieza unida.

(4) Fóllos 59 y 60 de la pieza principal.

él se hallaba D. José Varela, rogábale que remitiese á este *poder para administrar dicho mayorazgo*. En el mismo año decia Varela á D. Diego de Castro y á su muger, en carta de 6 de Octubre (1), que no podia ver sin dolor *abandonadas y en poder de manos estrañas las haciendas*, y les escitaba á que dejasen venir á su compañía al hijo ó nieto, á quien correspondieran los bienes, *para que, siendo el primero, no le sucediese la desgracia que á él hubiera sucedido*. Don Diego contestó á Varela en carta de 3 de Febrero de 1817 (2), *remitiéndole poder cumplido* para encargarse de la administracion de los bienes: *en el entretanto*, decia, *crece mi nieto primogénito D. José Francisco Rivas Castro y Posada, que actualmente es de 13 años*.

Encargóse con efecto Varela de la administracion, ó entró de nuevo en el disfrute de los bienes; porque los verdaderos poseedores ningun provecho inmediato alcanzaron del triunfo conseguido. Falleció aquel en el año de 1829, y entonces D. Antonio María Argüelles, titulándose apoderado de su madre D.^a María Josefa de Cangas, recurrió al Juez Noble de Llanes, solicitando que se le diera posesion de los vínculos y mayorazgos, *que viviendo disfrutaba D. José Varela*, y en los cuales era sucesora su espresada madre SEGUN RESULTABA DEL TESTAMENTO, OTORGADO POR DICHO SR. VARELA *al cumplir el año de noviciado en su encomienda, ante el escribano Félix Martin, con fecha DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO*. Así

(1) Fóllos 61 y 62 de la pieza principal.

(2) Fóllos 63 y 64.

aparece en una certificacion presentada por D. Antonio María Argüelles, que ninguna eficacia tiene á su favor, porque fué redargüida de falsa civilmente y no se cotejó con el original. Pero es de notar que se fundó en un testamento de D. José Varela, anterior á la sentencia (1) por la cual este fué condenado á la restitucion de los vínculos, para obtener la posesion, en que *dice* haber entrado judicialmente.

Con estos antecedentes se dirigieron D. Nicolás Rivas y demás descendientes y herederos de D.^a María Tomasa de Posada á D. Antonio María Argüelles, reclamando los bienes que fueron vinculados, y de los cuales hubiera entrado en posesion D. Diego de Castro, y despues en tenencia, como administrador, don José Varela. Se resistió á esta pretension, y hubo menester de entablar la demanda que dió origen al pleito pendiente. En ella se pide que D. Antonio María Argüelles sea condenado á la restitucion de *los bienes que constituian los vínculos de que fué poseedora D.^a María Tomasa Posada y Esquivel*.

La sentencia de primera instancia fué favorable á la pretension de los demandantes, y, habiendo apelado de ella el demandado, espresó agravios ante el Tribunal Superior, y en contestacion se produjo el siguiente escrito.

(1) Dictada en 10 de Diciembre de 1800.

Excmo. Sr.:

D. Cristino Gonzalez de la Fuente, en nombre de D. Nicolás Rivas y litis-consortes, contestando al escrito de espresion de agravios en los autos con D. Antonio María Argüelles sobre restitucion de bienes, digo: Que V. E. se ha de servir confirmar la sentencia que el Juez de primera instancia de Llanes pronunció en 31 de Enero último, con imposicion de todas las costas al apelante.

Podríamos limitarnos á reproducir los escritos de los fólíos 115 al 125 y 283 y siguientes, para rebatir las objeciones, que contra el fallo se oponen, amplificando las aducidas en la instancia precedente; porque, no obstante la habilidad y reconocida maestria con que los razonamientos se eslabonan, impugnados están, y perfectamente analizados quedan además en los fundamentos de la sentencia.

No habrá menester de que digamos una palabra mas acerca de si los bienes demandados son los mis-

mos, que detenta D. Antonio María Argüelles desde el fallecimiento de D. José Varela. Él concede que se apoderó de los vinculares, que este disfrutaba; de los mismos precisamente que se especifican con repetición en los documentos, que obran en la pieza unida al rollo de primera instancia, y de los cuales entró en material posesion el representante de D.^a María Tomasa, segun consta á los fólíos 259 y siguientes de la citada pieza, en el año de 1805.

Nos vamos á ocupar de lo que constituye el objeto único de las alegaciones contrarias.

Sostiene D. Antonio María Argüelles que la sentencia pronunciada en el pleito que se siguió entre D. José Varela y D. Diego de Castro, como marido de D.^a María Tomasa de Posada, no tiene la fuerza de cosa juzgada, ni importancia alguna para la cuestion actual; que los demandantes no han probado su legítima descendencia de D.^a María Tomasa de Posada; que por virtud de la ley de desvinculacion es dueño, desde el 30 de Agosto de 1836, de los bienes que fueron vinculados, no habiendo propuesto en todo caso mis poderdantes la accion conducente para obtener la declaracion de que, con arreglo á la fundacion ó fundaciones, les asiste un derecho preferente al suyo; y, por último, que habria ganado el dominio por prescripcion, dado que ninguna de las otras escepciones bastase para combatir la demanda. En la contestacion seguiremos el mismo orden con que se han presentado y desenvuelto las anteriores observaciones, y dividiremos nuestro escrito en las mismas partes en que ha dividido el suyo, alegando de bien probado, D. Antonio María Argüelles.

PRIMERA PARTE.

El aforismo jurídico, que sirve de tema para contradecir la eficacia de la sentencia pronunciada á favor de D. Diego de Castro, fué ya tomado en consideracion por los demandantes, y aplicado en su verdadero y natural sentido. Convenimos en que la cosa juzgada perjudica á los que han sido parte en el pleito y á sus herederos, sin trascender á personas estrañas; pero este principio es incontestable hasta cierto punto, y en tanto que sea distinta la condicion de las personas, que litiguen sobre la misma cosa que haya sido objeto de un fallo anterior, y por la misma razon de pedir. Repetimos aquí lo que por una y otra parte se ha consignado. Cuando se trata de los efectos de la cosa juzgada respecto de terceras personas, *inspiciendum est an idem corpus sit, an eadem causa petendi, et EADEM CONDITIO personarum*. No basta, por consiguiente, alegar que la sentencia de principios del presente siglo fué pronunciada entre otros, distintos de los actuales colitigantes; ni tampoco que D. Antonio María Argüelles descende de una línea, que no es la de D. José Varela, contra quien el fallo se pronunció: porque lo importante es averiguar si el demandado se encuentra en las mismas ó peores condiciones, en que este último se hallaba; si la cosa demandada es la misma, y se pide por la misma razon. En caso afirmativo la ejecutoria perjudica al adverso,

y es incontrastable la accion, que reconoce como principal fundamento lo que en ella se declaró,

Lo comprende así D. Antonio Maria Argüelles, y esta es la razon de que se propusiera, si bien en vano, demostrar que el objeto de la presente contienda no es el mismo, que el que antes de ahora se debatió, ni la misma la accion, ni tampoco sus fundamentos. La série de observaciones, que con tal motivo se aducen, descansa sobre un supuesto ó interpretacion inadmissible respecto de las palabras: *eadem conditio personarum*; y tambien sobre el cambio introducido por las leyes de desvinculacion en la manera de ser de los bienes, que fueron vinculados.

Se dice que los intérpretes, al ocuparse del valor de la cosa juzgada, han esplicado los principios, en que nos apoyamos, de muy diversa manera que nosotros. Que al tratar de la condicion de las personas, exigiendo que sean las mismas, para aplicar en toda su latitud la accion y escepcion *judicati*, han espuesto que *debe examinarse si las personas que litigan conservan ó no la misma calidad, con que intervinieron en el primer pleito; esto es: si el actor entabla ó no nueva demanda, en la misma calidad en que presentó la primera, y si además la entabla ó no contra el mismo reo, en la misma calidad bajo la cual fué este emplazado para la primera*. No es así como deben de entenderse las palabras que la jurisprudencia romana nos legó. Si fuese requisito indispensable el que hubiera de litigarse el segundo pleito entre las mismas personas, que sostuvieron el anterior, cuya sentencia se trajese en apoyo de que la cuestion se hallaba definitivamente juzgada, no habrian dicho que fuese la misma

la condicion de las personas: *eadem conditio personarum*; sino que hubieran de ser las mismas personas, y en la misma condicion: *eædem personæ et in eadem conditione*. De esta manera se habrian espresado los jurisconsultos romanos, porque esto se hallaria conforme con el giro de su lengua. Fijáronse en la identidad de condicion, no en la identidad de personas. Por una parte se encontraban con el principio: *res inter alios judicata nobis nec nocet nec prodest*, y por otra con el no menos absoluto: *res judicata pro veritate habetur*. De ahí pues que, cuando se moviese una segunda controversia sobre lo que ya fuera ventilado, ejercitándose la misma accion, y sometiendo á discusion los mismos fundamentos que antes, hayan dicho: *si la condicion de las personas que agitan la segunda cuestion es la misma, que la de los primeros litigantes, la cosa juzgada es irrevocable*. Asi vinieron á sintetizar doctrinas que en apariencia eran contradictorias, dando una base mas estensa á los fallos de los tribunales, aunque no tanto que en ningun caso y por nadie pudiera removerse.

Se habia dicho en primera instancia:

«No se requiere que las personas sean las mismas necesariamente: basta que sea igual la condicion de aquellos entre quienes el pleito se ha seguido, y la de los que pidan la misma cosa y por la misma razon contra persona que se halle en iguales ó mas desventajosas circunstancias, que el anteriormente vencido en juicio. Es lo racional, y otra doctrina no podia obtener la consagracion de la ciencia, y el sello de los siglos. Si una vez se ha decidido ejecutoriamente que ciertas y determina-

» das escepciones, ó una accion cualquiera surten
 » tales efectos, ó carecen absolutamente de valor, ¿por
 » qué todos cuantos hubiesen de reproducir la misma
 » argumentacion y en idénticas condiciones no han
 » de respetar lo que una vez se ha juzgado? De no
 » ser así, ¿á qué límites quedaria reducido el aforismo
 » jurídico por todos reproducido: *res judicata pro*
 » *veritate accipitur*? Su accion se deja sentir no tan
 » solo entre los que litigan y sus herederos, sino
 » entre los que respecto de la misma cosa, y por idénticas
 » razones se encuentran en la misma condicion.
 » Esa es la razon de que, sin embargo de no haber
 » sido parte en el pleito, puedan terceras personas
 » alzarse de la sentencia que les perjudica, ó personarse
 » en cualquiera de las instancias. ¿Qué razon
 » de ser tendrian estas disposiciones, si la sentencia
 » no fuese para ellas ejecutoria? ¿Qué principios invocarían,
 » que interés tendrian en la cuestion para tomar parte en
 » agenas contiendas, si el resultado final no hubiera de
 » serles trascendental, si no les alcanzasen las consecuencias
 » de la resolucion? Todas las prescripciones se encadenan
 » y forman parte de un conjunto armónico. No se da efecto sin
 » causa, lo mismo en el orden jurídico que en los demás.
 » Como no es admisible la intervencion de una persona
 » enteramente estraña en negocios ó contiendas de otros,
 » nadie podria mezclarse en la discusion presente, si
 » absolutamente ningun interés tuviera en la cuestion;
 » pero, cuando el resultado le afectase de algun modo,
 » siempre que pudiera recibir alguna ventaja ó perjuicio,
 » su gestion estaria legitimada. ¿Por qué razon habria estado
 » en su derecho D. An-

» tonio María Argüelles para mostrarse parte en el
 » pleito, que se siguió entre D. Diego de Castro y
 » D. José Varela, suponiendo que á principios del siglo
 » hubiese abierto sus ojos á la luz de este mundo, á
 » cuyos intereses con tenacidad tal nos agarramos?
 » Porque, segun él dice, descende del mismo tronco
 » que las personas entre quienes se disputaba la po-
 » sion de los vínculos referidos; y, cuando versa
 » la cuestion sobre la paternidad ó filiacion, tiene la
 » sentencia fuerza de cosa juzgada contra todo el
 » mundo, en espresion de un jurisconsulto de la cien-
 » tífica tanto como erudita Alemania.

En principio es necesario, ineludible, admitir que la declaracion judicial es una verdad. Los tribunales no crean derechos: pronuncian declaraciones acerca de los ya existentes. Siempre que una contienda se haya terminado en debida forma; siempre que en las mismas condiciones se suscite nuevamente, á pesar de que sean distintas las personas, no podia echar en olvido la ciencia que el derecho siempre es el mismo, sin distincion de personas; que en la escena jurídica no se cambia lo negro en blanco, la justicia en injusticia, por que haya una variacion de personajes. La esencia de las cosas permanece idéntica á sí misma. En la filosofia del derecho no cabia pues dudar de que la verdad legal era una verdad, y de que una vez declarada lo estaba para todos, en tanto que no variasen sus condiciones en relacion con las personas á quienes afectase.

Esta doctrina de la jurisprudencia romana se transmitió á la legislacion de los modernos pueblos, y podemos decir que tomó forma en nuestros códigos, y que

tiene además la sancion del oráculo de nuestra jurisprudencia. Las leyes 20 y 21, título 22 y 7.^a, título 23 de la Partida 3.^a entrañan su espíritu, están modeladas sobre ella. En los casos de escepcion, á que hacen referencia, no se exige que sean unas mismas personas y en la misma calidad y condicion las que hayan de agitar el segundo pleito, para que la sentencia pronunciada en otro, seguido sobre el mismo objeto y por las mismas razones, tenga la fuerza de cosa juzgada. De ser así no habria caso alguno de escepcion, contra lo que claramente se espresa en el epígrafe de la ley 20, título 22, Partida 3.^a Los principios sostenidos en contrario constituyen la regla general. Mas á la vez que *el juizio que es dado entre algunos non puede empecer á otri*, la ley añade: *fuera ende en cosas señaladas*. Luego puede suceder que un fallo perjudique á alguno, sin haber sido dado contra él ó su causante; luego no es exacto que haya de haber necesariamente unidad en las personas, sino unidad en la condicion ó calidad de las que figuren en pleitos distintos. «Si alguno (1) se razona por fijo de otro, « dispone la ley citada, é el padre no lo quiere conocer » por fijo, si juizio fuere dado contra el padre en esta « razon, diciendo el juzgador en su sentencia que » es fijo de aquel, que non lo quiere conocer por fijo, » tal juizio como este empescerá al padre, é á todos » *sus parientes* en razon de los bienes que podria heredar por el parentesco, *magüer non se acertasen y » cuando fué dado el juyzio* si non el padre tan solamente. Y el glosador añade: *et si eis etiam ignoran-*

(1) Alegato de bien probado.

» *tibus præjudicavit*. No es indispensable que todos
 » los parientes sean parte en el juicio, para que á to-
 » dos perjudique la sentencia. Como se hallan en la
 » misma condicion unos que otros, como aducirian
 » unos mismos hechos é iguales observaciones, y co-
 » mo en consideracion á los fundamentos de hecho y
 » de derecho se pronuncian las sentencias, apreciado
 » su valor definitivamente, lo está y debe estarlo para
 » cuantos se hallen en el caso de las personas que li-
 » tigarón.» Así aparece clarísimamente determinado
 por el Tribunal Supremo. Citadas están las sentencias
 en el escrito de los fóllos 283 y siguientes; y como se
 intenta desnaturalizar las declaraciones de S. A., se
 nos permitirá que sobre ellas hagamos algunas breves
 indicaciones.

En la de 28 de Marzo de 1859 fué menester in-
 ventar una fórmula para desestimar el recurso, y
 dejar á la vez sin efecto las sentencias que se habian
 pronunciado, *solamente porque no figuraran en el*
pleito los pobres de Carmona, que tenian interés en
 su resolucion, siéndoles cualquiera que ella fuere,
 relativa á la validez ó nulidad de un testamento, *de*
grave é INMEDIATA TRASCENDENCIA. En el tercer consi-
 derando se espresa *que si bien las ejecutorias de los*
tribunales no perjudican GENERALMENTE á los que no
han tenido parte en los litigios, HAY ALGUNOS CASOS DE
 ESCEPCION, como sucedia en el de que se ocupaba el
 Tribunal Supremo, y por cuya razon declaró que
 no habia lugar á decidir el recurso.

En la segunda sentencia, que es de 18 de Marzo
 de 1861, se consigna con igual precision la misma
 doctrina. Existen, segun ella, fallos trascendentales

en sus efectos á terceras personas; y esto acontece siempre que, juzgada una cuestion, se promueve otra, *siendo idéntico el objeto, la causa ó razon de pedir, y las condiciones de las personas, con relacion al título de sus respectivas pretensiones*. Con toda claridad se dice que la circunstancia de ser distintas las personas no puede *autorizar una resolucion diferente, cuando los derechos invocados tienen un mismo fundamento*.

Iguales son las palabras que se repiten en otra sentencia de 15 de Abril de 1861. Aplicando los *principios en que están basadas las leyes 20 y 21, título 22 y 7.º título 23, Partida 3.º*, se considera que una resolucion pronunciada sobre la validez ó nulidad de un testamento, *no puede menos de afectar á un tercero, sin que la circunstancia de ser diferentes las personas pueda autorizar una declaracion contraria, siendo el mismo el fundamento alegado*. La misma doctrina y en los mismos términos.

Por tercera vez, pues, obtuvo la irrefragable sancion del Tribunal Supremo, órgano único para fijar la jurisprudencia, como que su objeto principal es el de uniformarla. A nuestro juicio no puede haber discusion sobre esto. Las sentencias son en determinados casos perjudiciales á terceras personas.

Se alega no obstante que en una de las citadas del Tribunal Supremo se habla del caso en que se den las mismas condiciones en las personas, *con relacion al título de sus respectivas pretensiones*. Con efecto, estas palabras dejamos ya trascritas. Pero no se tomen como punto de partida para una argumentacion, que tiene por objeto averiguar si el derecho de hoy es el mismo

sobre que versó el pleito anterior; porque esta transición no serviría para esclarecer el debate. Ya demostraremos que hay identidad en el derecho, á la par que en la condición de las personas. Lo que conviene por ahora es que, procediendo en la discusión por partes, nos limitemos á una de ellas.

Al ocuparnos de la condición de las personas damos por supuesto que los demandantes representan los derechos de D.^a María Tomasa de Posada—lo que en realidad sucede como luego veremos,—y nos colocamos en la misma situación que si hoy existiese la ascendiente de nuestros principales, y le fuesen disputados los derechos, que D. José Varela le negaba. ¿Se encuentra D. Antonio María Argüelles en las mismas condiciones, y aun en peores que lo estaba Varela, *con relacion al título de sus respectivas pretensiones*? En este terreno suele escudarse el demandado, bien con que entró á disfrutar los bienes como hijo de D.^a María Josefa de Cangas, nieto de D. José de Cangas Mier, segundo nieto de D. José Francisco de Cangas Posada, y tercer nieto de D.^a María Antonia de Posada Cangas, que descendía de D. Diego de Posada Pariente—,ó de D. Diego de Posada Gomez Lamadrid, que uno y otro se dice á los fóllos 110 y 320—;ó bien se alega que, con *derecho ó sin él*, entró en posesion de los vínculos. Al decir suyo, le basta haber acreditado que no es heredero del que los disfrutara hasta el año de 1829, ó en virtud de un derecho derivado del mismo. Si tal fuese suficiente, nosotros le habríamos dado armas para defenderse; porque concedido estaba que D. Antonio María Argüelles no descendía de D. José Varela, y de derecho es

que en los vínculos se sucedía al fundador. Mas trayendo la cuestion á su verdadero terreno ¿es ó no cierto que la condicion de D. José Varela superaba á la de D. Antonio María Argüelles, ó su madre, ó línea, con relacion al título de sus pretensiones? ¿Quién lo duda? La condicion de su línea era peor, y notablemente peor.

El testigo D. Juan de Posada Argüelles depone que el demandado era *sucesor inmediato del Varela*; por consiguiente la línea de este ocupaba un lugar preferente á la de D. Antonio, y, vencida la primera en competencia con otra, era natural que al mismo tiempo lo fuesen todas las que viniesen en pos.

En la certificacion de los fólíos 105 y 106, en ese documento, que sirve de prueba contra D. Antonio, y que nada vale contra los demandantes, si algo pudiera valer, por no haberse cotejado con su original, se dice tambien que de los vínculos, cuyos bienes se reclaman, estuviera en posesion D. José Varela; y, si estuvo en posesion, se supone que era legítimo sucesor, y que era preferido á D.^a María Josefa de Cangas y á toda su línea. Por lo mismo, si el fundamento único, que el adverso pudiera alegar para sostenerse en la posesion de los bienes, seria que el derecho vincular se habia convertido en él en derecho de libre propiedad, por virtud de las leyes desamortizadoras y como descendiente de los instituidores de los mayorazgos, el título de su pretension, el fundamento que alega, ó pudiera alegar, le coloca en condiciones muy inferiores á las de D. José Varela, teniendo en su consecuencia aplicacion al presente caso los principios, que hemos examinado.

Mas todavia; sus defectuosas compulsas, la prueba documental que habilitó desde el fóllo 274 al 281, si bien incompleta y de ningun valor para legitimar su filiacion, es suficiente para acreditar que descende de D. Andrés de Posada Rubin de Célis y de D.^a Tomasa Pastora Gomez Lamadrid, aunque no por línea agnaticia, ó de varon en varon. El lazo de union entre su línea y la de los poseedores de los vínculos es D.^a Antonia Francisca de Posada, hija de D. Andrés de Posada Rubin de Célis. Pues bien, á este le sucedió su hijo D. Diego de Posada, que era uno de los ascendientes de D. José Varela, como padre de D.^a Josefa de Posada y Cangas. D. Antonio María Argüelles estaba en grado y línea mas remotos que Varela. ¿Cómo habia de sostener este debate, ni con remotísima esperanza de buen éxito? Primeramente se hizo la ilusion de que descendia de D. Diego de Posada Gomez, mas tarde indicaba que su línea derivaba inmediatamente de D. Diego de Posada Pariente, y segun sus compulsas, en el caso de que algo prueben, resulta que el tronco comun entre él, Varela y los demandantes, es D. Andrés de Posada Rubin de Célis. De todos modos, D. Andrés de Posada y Cangas, hijo de D. Diego de Posada Gomez, y nieto de D. Andrés de Posada Rubin de Célis, excluyó á las líneas colaterales: descenden de él mis representados, y es incuestionable la temeridad con que se opone el demandado. Esa es la razon de que procure eludir las dificultades, que le rodean, rehuyendo siempre la ocasion de poner sus pretensiones al lado de las que un dia tuvo D. José Varela, sus mal llamados títulos junto á los de este comparando su obstinada resis-

tencia con la no menos pertinaz del condenado á la restitucion en 1800.

No solamente niega D. Antonio María que su condicion sea inferior á la en que estaba Varela, respecto de D.^a María Tomasa, sino que impugna la eficacia de la sentencia, por no agitarse hoy la misma accion que á fines del siglo último; por no versar la cuestion sobre el mismo objeto; y porque no son los fundamentos que se alegan, idénticos á los que constituian el fondo del pleito anterior. Todas estas observaciones, que se confunden y barajan de propósito con lo que se llama diferente calidad de las personas, descansan nada mas que sobre una sutileza. Los vínculos con todas sus consecuencias han desaparecido: ya no hay acciones vinculares, ni posesion vincular, ni, por lo tanto, los herederos de aquellos, que han sido declarados sucesores, pueden hoy comparecer en la calidad de tales, sino como dueños de los bienes, que se redujeron á la clase de libres. Apoderándose de este cambio en la manera de ser de la propiedad, se alega que la accion ejercitada en el pleito anterior era vincular, y en el presente reivindicatoria; que entonces se litigó sobre la sucesion en los vínculos, y hoy sobre restitucion de los bienes de que se componian, en una palabra: que no hay identidad de derecho ni de accion.

Si esta argumentacion hubiera de estimarse en toda su latitud, ninguna de las ejecutorias pronunciadas sobre la sucesion y derechos vinculares tendria hoy la fuerza de cosa juzgada, aun contra y á favor de los causa-habientes de aquellos entre quienes se hubiese litigado; porque siendo distinta la accion y

el objeto y los fundamentos de derecho, de ningun modo se considerarian juzgadas las cuestiones, que en la actualidad se suscitan sobre el dominio, con los fallos dictados acerca de la sucesion vincular. Tales principios nos conducen á la inconcebible consecuencia de que las declaraciones pronunciadas durante algunos siglos habrian quedado absolutamente sin eficacia, bajo las disposiciones de una ley, que no envuelve tal propósito, ni envolverlo podia. Se suprimieron las vinculaciones, pero en cambio de los derechos, cuya forma debia sepultarse en el panteon de las instituciones caidas, la ley dió origen á otros derechos compensatorios, que vinieron en sustitucion de los antiguos. A la accion vincular sucedió la reivindicatoria, y á la posesion el dominio. Este cambio se verificó en consagracion de los derechos, que mas bien esperimentaron una variacion en la manera de ser, que un ataque. Así es que al discutir hoy sobre la propiedad de bienes, que fueron vinculados, discurremos siempre bajo un supuesto implícito: bajo la hipótesis de que, si el mayorazgo ó vinculacion subsistiese, la posesion corresponderia á este ó al otro, y que, por consiguiente, en su compensacion, y por la accion que de la ley nace, le pertenece la propiedad. Estos son en la esencia los debates, que diariamente se promueven despues de las leyes de desvinculacion, y á ningun tribunal se habrá ocurrido que el declarado sucesor en una vinculacion, ó sus herederos no podian fundarse en tal declaracion para obtener la restitution del dominio, por haberse cambiado el nombre de las cosas al tomar un derecho anómalo la forma regular de todos los demás. Con-

virtiéndose la posesion vincular en derecho de propiedad, se efectuó de manera que los antiguos poseedores son dueños por los mismos títulos y razones, con que antes recibian una sucesion, que á otro habia de transmitirse despues por ministerio de la ley. De aqui se deduce que la calidad de poseedor y propietario para el caso es una misma.

Tanto mas atendibles son los precedentes razonamientos, cuanto los fundamentos de la discusion son iguales antes que despues. A D.^a María Tomasa de Posada se le declaró sucesora en los vínculos fundados por sus mayores, por descender de estos y ser de una línea preferente á todas las demás: esto habia de sostener tambien á su favor D. Antonio María Argüelles, si hubiese formulado alguna pretension, y no se limitara á contradecir la de los demandantes; luego versen este pleito y el de 1800 sobre la posesion ó sobre la propiedad, y agítese una accion reivindicatoria ó vincular, el resultado será siempre que el objeto principal de la cuestion está en averiguar cuál de los descendientes está en mejor línea y grado. Por eso decian mis poderdantes en primera instancia que, sin embargo de haberse pronunciado la sentencia de 1800 sobre derechos vinculares, es aplicable la ley 20, título 22, Partida 3.^a (1). Hoy nuestra opinion se encuentra reforzada con la del mismo demandado.

Dijo, alegando de bien probado al fóllo 325, que *la sentencia ejecutoriada en 10 de Diciembre de 1800, en*

(1) Admitido estaba su principio entre los escritores mayorazguistas. L. Molina, en su tratado *De Primogeniorum Hispanorum Origine*, L. 3, C. 13, núm. 22, A., decia: *sentencia lata contra possessorem majoratus vel prædecessorem, affert præjudicium sequentibus ejusdem CONDITIONIS et naturæ.*

cuanto haya declarado implícita ó explícitamente que D.^a María Tomasa de Posada, era hija de D. Miguel de Posada, nieta de D. Andrés de Posada, etc., perjudicaria ciertamente á los demás hijos y nietos, y, si se quiere, á todos los parientes de estos, que habrian de reconocerla como tal. De la importancia de esta concesion ni un momento puede dudarse, por que, si está ejecutoriado que D.^a María Tomasa es descendiente de los fundadores, y como tal legítima poseedora, Don Antonio María, para justificar su resistencia, debia acreditar primeramente que era tambien legítimo descendiente, y, además, que su línea estaba antes que la de D.^a María Tomasa. No basta decir que, además de la filiacion legítima, otras cuestiones habrán podido ventilarse en el pleito de 1800. Con nuestras compulsas de los fóllos 210 al 258 se comprueba que de la filiacion se trató y de nada mas. ¿Y qué otra cuestion se habia de promover en un pleito sobre sucesion vincular? Las fundaciones con llamamiento regular obran en la pieza unida; está conforme el mismo demandado en que los bienes fueron de mayorazgo; por consiguiente, el de mejor línea y grado era el preferido. Se declaró legítima sucesora á D.^a María Tomasa de Posada; luego decidida está la cuestion de filiacion, y declarada en sentencia ejecutoria que esta última era hija de D. Miguel de Posada, y descendiente de todos los demás, que constituyen su tronco en el árbol genealógico.

No pondremos en duda que algun otro pariente podria hacer valer despues su mejor derecho á la sucesion de los mayorazgos, sin embargo de estar ejecutoriado que la línea de D.^a María Tomasa era ante-

rior á la de Varela, y á cuantas se hallasen en la misma ó peores condiciones. Mas no tendria necesidad de justificar nuevamente su filiacion la que una vez ha sido declarada hija de D. Miguel de Posada. El tercer opositor seria quien hubiese de acreditar la preferencia, á que aspirase; porque, segun la ley 20 citada, segun la concesion del adverso mismo, á todos los parientes perjudica la declaracion contenida en la sentencia de 1800, y para todos D.^a Maria Tomasa es descendiente de los fundadores, sin necesidad de nuevas declaraciones. Alegando que los demandantes necesitarian ganar contra D. Antonio María Argüelles otra sentencia, en que se decidiese que la línea de donde desciende era preferente á la del demandado, se incurre hasta cierto punto en una contradiccion. Los terceros, que se conceptuen con mejor derecho, deben alegarlo y justificarlo: *hacerlo valer*, como en el alegato de bien probado se dice, para llegar al éxito que se propongan. Entre tanto, á D.^a María Tomasa se le dió posesion como legítima sucesora, y en términos absolutos, sin relacion ó con preferencia á una línea determinada. Por ministerio de la ley fué transmitida la posesion á sus sucesores. En los demandantes, ó en aquellos de quienes derivan su causa, se realizaron los efectos de la ley de desvinculacion. Ellos adquirieron el dominio en cambio de la posesion vincular. Ellos pueden ejercitar la accion, que para reivindicar la cosa va unida al derecho de propiedad. En su consecuencia, los que aleguen un preferente derecho, los que se supongan con otras acciones, los que se conceptuen de mejor línea, que la de D.^a María Tomasa de Posada,

son los que contra sus descendientes se hallan en el caso de entablar la demanda correspondiente. De otro modo la posesion de 1805 ningun efecto surtiria; no se habria convertido en dominio, por virtud de una ley, á que se acoje el demandado; ó su derecho por razones especialísimas no encontraria accion, por cuyo medio se hiciera valer.

Estas mismas consideraciones se consignan en la sentencia apelada, y, acudiendo á deducciones muy violentas, se alega que, no obstando la ejecutoria de 1800 á que otro sea declarado con mejor derecho á la propiedad, se debe reconocer tambien que no surte los efectos de cosa juzgada contra quien no ha sido parte en el pleito. Ningun enlace hay entre esta consecuencia y las premisas. La ejecutoria perjudica á D. Antonio María Argüelles, porque en ella se ha fijado respecto de todos sus parientes la filiacion de D.^a María Tomasa; y porque se encuentra en peores condiciones que la persona contra quien se dictó, siendo hoy objeto del pleito el mismo derecho, que antes se ventiló, sin que puedan alegarse, ni se aleguen, otras razones que entonces. Por esto es ejecutoria contra D. Antonio María la sentencia. Si él estuviese en mejor condicion que Varela, y lo probase, variaria de aspecto la cuestion: entonces faltaria una de las identidades, necesarias para que la sentencia perjudique á persona que no ha litigado.

Si los bienes disputados estuviesen en poder de D. Nicolás Rivas y consortes, se dice en el escrito de espresion de agravios, D. Antonio María Argüelles no podria arrancárselos, sino demandándoles y ven- ciéndoles en juicio. Mas hallándose, como se halla, en

la posesion de los dichos bienes, no necesita promover tal litigio. Por manera que, si no hubiese tenido lugar la intrusion, la sentencia surtiria los efectos de cosa juzgada, en tanto que otro no se presentase con mejor derecho; pero, despues de la intrusion, la ejecutoria perdió su carácter de tal. Un hecho de una tercera persona, un abuso bastó para desvirtuarla. Y esta argumentacion tendria en el año de 1806, ó un dia despues de haberse posesionado D.^a María Tomasa de Posada en los bienes, el mismo valor que hoy. ¿Tales proposiciones pueden sériamente defenderse? La reconocida por los tribunales como legítima sucesora ¿no tendria accion contra cualquier detentador, ora se llamase descendiente de los fundadores, como D. Antonio María Argüelles, sin probar su legitimidad, ora quisiese prescindir de si con derecho ó sin él se apoderara de los bienes, no tendria accion, decimos, para basarse en la cosa juzgada, y obtener la restitucion, mientras otro con mejor derecho no se presentase? Tan claro, tan evidente es que para sostener lo contrario se necesita subvertir elementales principios de derecho; es menester negar todo valor á la cosa juzgada, y dejar espuesta su santidad, la mas inviolable bajo el punto de vista jurídico, á los golpes de la osadía ó del primer intruso.

Por lo demás, repetimos que en el fondo hay visible contradiccion entre sostener que Rivas y consortes, para restituirse á la propiedad, necesitarian *que se declarase su derecho preferente segun los llamamientos y las leyes que han regido sobre la sucesion vincular*, y la concesion de que es perjudicial á todos los parientes la declaracion *implícita ó explícita*, pro-

nunciada en 10 de Diciembre de 1800 sobre la filiacion de D.^a María Tomasa; porque, siendo legítima sucesora por descender de varon en varon y en la mejor línea, y siendo regular el llamamiento, indisputable es la preferencia. Respecto á la línea, que suponemos de D. Antonio María, no puede quedar la menor duda: aun concedida la legitimidad de su progenie, se enlazaria con el tronco de los poseedores por medio de D.^a Antonia Francisca de Posada, y antes que ella está la línea recta de D.^a María Tomasa, y todavia la colateral, que fué vencida, de D. José Varela.

«Sin embargo (1) de todo, nuestra complacencia
» para con el demandado nos indujo á traer á los autos
» en compulsa medios de prueba suficientes para acreditar que D.^a María Tomasa de Posada obtuvo la
» restitucion de los bienes, que él detenta, con derecho
» indisputable. Hemos juzgado conveniente proceder
» así para que D. Antonio María Argüelles quedase
» plenamente convencido, y sin el mas ligero escrúpulo en su conciencia de que los bienes corresponden á nuestros poderdantes.

» Al fólío 215 obra la partida bautismal de D.^a María Tomasa, hija de D. Miguel Posada y de D.^a María de la Luz Esquivel. La de matrimonio de estos ocupa el mismo fólío vuelto, y la de defuncion de D. Miguel el siguiente 216. Este último era hijo de Don Andrés y de D.^a Francisca de Herrera y Salazar, fólío 218, y su matrimonio aparece comprobado al 220 vuelto. La partida bautismal de D. Andrés de

(1) Alegato de bien probado.

» Posada y Cangas, fólío 221 vuelto, acredita que es
 » hijo de D. Diego de Posada Madrid, y de D.^a Rosa
 » Ventura de Cangas, y en la de su fallecimiento
 » consta que tuvo por hijo al espresado D. Miguel.
 » Tendrá todavía alguna duda D. Antonio María Ar-
 » güelles de que á D.^a María Tomasa de Posada se le
 » declaró con derecho sucesora en los vínculos que
 » poseyera D. Andrés de Posada y Cangas? Podrá ser;
 » pero, si no le satisfacen los documentos compulsa-
 » dos, la correspondencia auténtica (1) de los fólíos
 » 59 y siguientes, y la importante declaracion del
 » primer testigo, para quien Varela fué un simple ad-
 » ministrador, y D. Diego de Castro verdadero posee-
 » dor, en representacion de su mujer, vuelva sus ojos
 » hácia la sentencia de la Real Chancillería de Valla-
 » dolid, y acate la resolucíon que contiene, ejecutoria
 » en todo, y por lo menos en cuanto da fuerza pro-
 » batoria á documentos que se hallan legalizados en
 » forma, como se espresa en el fólío 221.»

Pero inseguro D. Antonio María en esta primera posicion se acoje á otra, é impugnó la demanda y ahora la sentencia, diciendo, que mis representados no descienden de D.^a María Tomasa de Posada, porque los documentos presentados para acreditarlo no reunen, segun él, las circunstancias que las leyes exigen en los procedentes de pais extranjero. La demostracion de que llenan todos los requisitos será objeto de nuestra

(1) Segun la cual debió recibir Varela poder de D. Diego de Castro para administrar los bienes.

SEGUNDA PARTE.

La orden del Regente de 9 de Junio de 1842 no exige otras circunstancias, para que hagan fé en los tribunales de España documentos procedentes del extranjero, que la de haberse *legalizado por los Cónsules ó agentes consulares de S. M., acreditados en el pais de que procedan aquellos*. Con posterioridad ninguna otra disposicion general se ha publicado en la *Gaceta*. A la orden del Regente, por lo tanto, debemos atenernos, y, si los documentos están legalizados por un agente consular, merecen fé, y mucho mayor despues de practicado el cotejo con los originales.

Alégase que es otra la práctica, y que en Real Orden de 7 de junio de 1859, circulada por la Cancillería de nuestro Ministerio de Estado, se dispone que sean firmados dichos documentos por el Jefe de legacion ó Cónsul respectivo, cuando procedan de vicecónsules ó agentes consulares, que no siguen correspondencia directa con el espresado Ministerio.

Por lo que toca á la supuesta práctica sabemos por la Orden de 9 de Junio de 1842 que, antes de esta fecha, solian presentarse los documentos de procedencia extranjera *legalizados por comerciantes ú otras personas*: ignoramos que con posterioridad se haya introducido otra práctica, y, sobre todo, que adquiriese fuerza de ley. En su comprobacion nada encontramos en los autos, ni una ejecutoria se nos cita.

Respecto á la que se llama circular de 7 de Junio, y nos estraña cómo siéndolo vino á manos de D. Antonio María Argüelles, ni se insertó en la *Gaceta*, ni en ella se determina que la legalizacion haya de hacerse por estas ó las otras personas. No reforma las prescripciones claras y terminantes de la Orden del Regente, no tiene por objeto sujetar á reglas precisas la legalizacion; sino que los documentos, que se presenten á legalizar, esto es, cuando se presenten, si *procediesen* de vice-cónsules ó agentes consulares, que no se hallen en directa correspondencia con el Ministerio, sean además firmados por el Jefe de la legacion ó por el Cónsul respectivo. Esta circular para el caso nada significa. Su objeto es introducir cierto orden y disciplina que debe observarse en las funciones de legalizacion, *cuando* se pida al Ministerio: *no se ocupa de los requisitos, que han de concurrir en los documentos, para hacer fé en los tribunales*, lo cual seria menester para que derogase la Orden de 9 de Junio de 1842.

Ahora nos cumple hacer notar que cuando en la instancia anterior se decia que á los demandantes era desconocida otra disposicion general, posterior al año de 1842, sobre legalizaciones, se estaba muy lejos de replicar con ironía á las escepciones del demandado. La circunstancia misma de presentar esto que se apellida circular, el no haberse insertado en la *Gaceta*, y, despues de todo, la misma prescripcion que contiene, autorizaban la réplica, y ahora repetimos que no hay orden, decreto ni ley, que derogue la disposicion de 1842. Si el documento del fóllo 315 contiene alguna á que se haya dado *la publicidad conveniente*,

para nosotros es desconocida. La promulgacion en forma era tan indispensable, que constituye una de las condiciones necesarias en toda soberana disposicion para que sea obligatoria. Tan claro es esto, y tan evidente que á nada conduce la presentacion de tal documento, que ni una palabra mas podemos decir sobre el asunto.

Otro documento se presentó en la instancia anterior con el alegato de bien probado, *que tampoco merece fé*. Al parecer, es una certificacion espedida por D. Fernando de la Vera é Isla, segun la cual D. Antonio Gonzalez Gutierrez fué nombrado en Setiembre de 1852 vice-cónsul de España en Mérida de Yucatan, sin que hasta la fecha hubiese noticia de que cesara en las funciones de su destino. *Esa certificacion está fechada con posterioridad al término de prueba, fué espedida sin citacion de los demandantes*, y es por lo mismo de ningun efecto en juicio. Pero se añade que, segun la *Guia diplomática* y la de *Forasteros*, estaba á cargo de D. Antonio Gonzalez el vice-consulado de Mérida en 1860 y 62. Desconocemos esta particularidad, porque ni hemos examinado esos documentos, ni tenemos para qué. Lo que sabemos es que, cuando D. Nicolás Rivas salió de Yucatan, y vino á Asturias con objeto de iniciar el presente pleito, habia fallecido ya D. Antonio Gonzalez, quien efectivamente desempeñó el cargo de vice-cónsul en Mérida. Era D. Juan de Regel el que estaba y continúa al frente del vice-consulado. A él por lo tanto se dirigieron los demandantes para la legalizacion, constándoles hoy que es el funcionario, que representa á S. M. en Mérida.

Los documentos procedentes de Méjico se acompañaron con la demanda: el vice-cónsul que los autoriza es el mismo D. Juan de Regel, que legalizó despues el cotejo. ¿Por qué, si D. Antonio María Argüelles procede con buena fé, no ha impugnado con oportunidad la eficacia de la legalizacion, fundado en que Regel ejercia una *autoridad usurpada*? ¿Por qué ha reservado esas objeciones para cuando ya no habia posibilidad de replicarle? Afortunadamente no es esta la ocasion de discutir acerca de si los documentos *son ó no falsos*, y mucho menos *sobre la legitimidad de las funciones*, que de hecho ejercen los que intervinieron en su otorgamiento ó legalizacion con cualquier carácter. Las dudas que sobre esto se susciten son de distinta índole: *deben ventilarse en juicio criminal*, y cuando D. Antonio María se retrae de penetrar en esa senda, limitándose despues del cotejo á redargüirlos de falsos civilmente, inconducente es cuanto alegue sobre lo que ahora no podemos examinar.

Él manifiesta que dió encargo y poder á persona de su confianza para que asistiese al cotejo, y que, debido á las difíciles circunstancias que viene atravesando la República mejicana, no hubiera podido presentarse en Izamal y Mérida su apoderado. Sin embargo del estado de guerra, en que la República se encuentra, fácil le habria sido presenciar el cotejo; porque los inconvenientes no estaban en verificarlo, despues de llegado el exhorto, sino en la remision, que embarazaban la ruptura de relaciones diplomáticas y el bloqueo del Estado de Yucatan. El representante de D. Antonio pudo asistir al cotejo, y, si no lo hizo, la validéz é importancia del acto son las

mismas. Presumible es que antes ó despues lo haya practicado por sí, para cerciorarse de la exactitud de los hechos; quizá D. Antonio María tendrá en su poder copias enteramente conformes con las que obran desde los fóllos 12 al 57. Hecho el encargo es de suponer que no haya perdido completamente el tiempo la persona á quien se dirigiera. El objeto era investigar si se habia cometido alguna falsificacion, si los demandantes descenden ó no de D.^a María Tomasa de Posada, y esto pudo averiguarlo el representante de Argüelles, sin intervencion de los demás interesados. ¿Por qué no entabla la accion criminal? ¿Por qué no redarguye de falsos criminalmente los documentos? Porque le consta su autenticidad; porque ni asomo de duda tiene de que mis representados son hijos y nietos respectivamente de las personas, que descenden de D.^a María Tomasa de Posada, de D. Miguel de Posada, etc.

Supónese que hemos reconocido la necesidad de legalizar los documentos de procedencia extranjera del modo á que en contrario se da una importancia que no tiene, en el hecho de haberse legalizado el exhorto dirigido á Yucatan por el Ilmo. Sr. Regente, por el Subsecretario de Gracia y Justicia, por el de Estado, por el Embajador de Francia en Madrid, por un Subdirector de la Cancillería Francesa, y últimamente por el Secretario de la Legacion mejicana en Francia. Pero no se toma en cuenta que todo esto era necesario entonces para alcanzar la certificacion de un funcionario mejicano, que autorizase la firma del Juez de primera instancia de Llanes. Si en ese partido judicial ó en Asturias hubiese un agente con-

sular mejicano, que garantizase á las autoridades de su Nacion la legítima procedencia del exhorto, no habríamos recurrido al Ministerio de Gracia y Justicia y al de Estado; así como no habríamos reclamado la mediacion de la diplomacia francesa, si en Madrid tuviese entonces la República mejicana membajada, legacion ó una representacion cualquiera. D. Antonio María Argüelles se fija en la manera con que hemos procedido hasta llegar á obtener la certificacion de un funcionario mejicano; pero se olvida de que *el exhorto se presentó directamente á los Jueces de Mérida é Izamal*, despues de autorizado con la firma del segundo Secretario de la Legacion mejicana. Si estuviese en observancia la práctica que se supone, para que el exhorto se diligenciase en Méjico, habria sido necesario que se presentase con la certificacion del Ministro de Estado y del Gobernador de Yucatan. Pero los Jueces, á quienes iba dirigido, hicieron lo mismo que el de Llanes: desde que se encontraron con la firma de un funcionario de su Nacion, dieron exacto cumplimiento al exhorto. Está, pues, en una equivocacion el demandado, si cree que en la práctica nos hemos separado de la doctrina, que en esta parte venimos sosteniendo.

Tambien se dice que es informal el cotejo, por no haberse hecho relacion especial de los documentos que se cotejaban, en los cuales no se puso la firma del Juez, ni del escribano, ni siquiera el sello del Juzgado. De aquí pretende deducir que el cotejo podia referirse á las certificaciones que obran en autos, ó á cualesquiera otras.

Precisamente no se leyeron con bastante de-

tenimiento las diligencias de los fólíos 269 y 270. Practicado el cotejo con referencia expresa de los fólíos que ocupaban las copias, se dispuso por los Jueces de Izamal y Mérida que se *rubricasen las partidas originales, así como las cotejadas, como se verificó*; y las copias se devolvieron con efecto rubricadas por los Jueces y escribanos de Izamal y Mérida. Aunque se dice que las rúbricas no están legalizadas, lo están las diligencias del cotejo en que se mandó practicar lo que se practicó, y en las cuales se da fé de lo que tuvo lugar. Dudar ni un momento siquiera de que las certificaciones presentadas con la demanda son las mismas que se han cotejado, es tanto como asentar hipótesis manifiestamente gratuitas para discurrir sobre ellas á placer.

Despues del cotejo, tampoco es de significacion el que se espidieran separadamente los documentos. La foliatura y las rúbricas garantizan la exactitud de que ellos y no otros se han presentado á los Jueces de Izamal y de Mérida.

En cuanto á la fórmula empleada por el gobernador del Estado de Yucatan, quien se limita á certificar que los Jueces y escribanos, á que se refiere, se hallan en el ejercicio de sus funciones, diremos únicamente que menos explícito estuvo el Embajador de Francia, quien juzgó suficiente decir: *visto para legalizacion de la firma anterior*; y sin embargo nadie ha puesto en duda la legitimidad de la de D. Juan Tomás Comyn.

Desapareció el original de la partida de defuncion de D. Diego de Castro, que para nada era necesaria.

Y sucedió lo mismo con la de bautismo de D.^a María Inés Castro de Posada. Pero el defecto de esta se suple con las de los fóllos 16, 17 y 53 en donde aparece que es hija de D. Diego y de D.^a María Tomasa. De todos modos, *bastaría que uno solo de los demandantes justificase su derecho*, y por esta consideracion es inútil que mas nos detengamos en lo que ninguna influencia puede ejercer para el resultado final.

«Se acogerá, decíamos alegando con vista de las
» pruebas, á la desaparicion de las matrices correspon-
» dientes á las certificaciones de los fóllos 13 y 15.
» Mas, como en la misma diligencia de cotejo se es-
» presa, fué debido á las continuas convulsiones po-
» líticas que ha sufrido el Estado, y corrieron la mis-
» ma suerte, que otros muchos documentos. No pare-
» cerá inverosímil á D. Antonio María Argüelles que
» así fuese, pues la suerte de esa República, constan-
» temente agitada, y en lucha perenne con elemen-
» tos que hondamente la perturban, explica sin difi-
» cultad el extravío de esos y otros muchos docu-
» mentos.

» Afortunadamente no es circunstancia, que en
» el presente pleito merezca siquiera tomarse en
» cuenta. Lo hacemos, sin embargo, previniendo las
» observaciones del demandado. La certificacion del
» fóllo 13, que es una de las que no han podido cote-
» jarse, está suscrita, como todas las demás hasta el
» fóllo 21, por D. José Camilo Vela, y ningun menes-
» ter hay de conocimientos caligráficos para adquirir
» firme conviccion de la identidad de su firma y rú-
» brica con las que hoy son indubitadas. Por otra par-
» te, la certificacion es referente á la defuncion de

» D. Diego de Castro, de quien no derivan sus dere-
 » chos los demandantes, sino de su muger D.^a María
 » Tomasa de Posada. La del fóllo 15, autorizada por el
 » mismo D. José Camilo Vela, es de bautismo, pero su
 » defecto se suple con otras, en donde aparece que
 » D.^a María Inés Castro de Posada es hija legítima de
 » D. Diego y de D.^a María Tomasa. En las de los fóllos
 » 16, 17 y 53, consta concluyentemente. Y aun cuan-
 » do supusiéramos que no constase, y que los descen-
 » dientes de D.^a María Inés no habian justificado sus
 » pretensiones, todos los demás son descendientes de
 » D.^a María Tomasa, y, como tales, tienen derecho en
 » la totalidad de los bienes: *totum in toto et in qualibet*
 » *parte.*»

Quiere D. Antonio María hacerse la ilusion de que es importantísima la equivocacion padecida en el certificado del fóllo 34. Se espresa en él que D. Diego de Castro contrajo matrimonio con D.^a Manuela Posadas, natural y vecina de Mérida, *hija de D. Miguel Posadas y de D.^a María de la Luz Esquivel*. Todo está bien, sino que se le cambia el nombre, y se añade una letra á su apellido, que en otra parte se convierte tambien en Bosadas. En tan patente equivocacion se funda el apelante para sostener que D.^a María Tomasa de Posada no fué la que contrajo legítimo matrimonio con D. Diego de Castro. Dejémosle fijar su atencion en la partida del fóllo 34, y, si le place, tambien convendremos con él en que D.^a Manuela Posadas no fué sucesora en los vínculos, ni es ascendiente de los demandantes. Pero él á su vez convendrá con nosotros en que, segun la compulsa del fóllo 214, contrajo le-

gítimo matrimonio D.^a María Tomasa Posada con Don Diego de Castro; y por consiguiente, que los hijos de ambos fueron legítimos, *como en todas las partidas de bautismo se espresa.*

TERCERA PARTE.

Se pretendió demostrar que, todavía en el caso de poderse invocar contra el demandado la sentencia de 1800, y de ser mis principales descendientes y herederos de D.^a María Tomasa de Posada, no procedería la restitucion, porque desde 30 de Agosto de 1836 se dice que es dueño de los bienes D. Antonio María Argüelles, por haberse verificado en él los efectos de la ley de desvinculacion. Además supónese que D. Diego de Castro no entró en posesion como legítimo representante de su muger, y que Varela continuó en ella, sucediéndole á su fallecimiento D. María Josefa de Cangas.

En el año de 1805 tomó formal posesion el apoderado de D. Diego de Castro. Así consta en la pieza unida, fólíos 259 y siguientes, y así lo comprueban la declaracion de D. Juan de Posada Argüelles, fólío 179, y las cartas presentadas con la demanda, fólíos 59 al 64. Esta posesion civilísima, que despues de la sentencia de 1800 nadie podia tener sino D.^a María Tomasa, se trasmitió á sus descendientes por ministerio de la ley, y á ellos correspondia cuando se restablecieron las de desvinculacion. D. José Varela

nunca fué poseedor: intruso ó detentador en un principio, concluyó siendo administrador.

A su fallecimiento se apoderó de los bienes Don Antonio María Argüelles por sí, ó en representacion de su madre, y los disfrutaba en 30 de Agosto de 1836. Aunque presentó la certificacion de los fólíos 105 y 106, con ella nunca podia acreditar que tenia justo título y buena fé. Repetimos lo que en primera instancia se ha dicho y repetido: si algo se probase con ese documento, cuyo valor es ninguno, seria que en el dia 24 de Abril de 1829 habia empezado el disfrute, á que tanto apego muestra D. Antonio; ó que habia tratado de cubrir con un velo de legalidad su intrusion: mas el título, como que era independiente, y debia preceder al acto, no se acreditaba por ese medio: los hechos no se justifican á sí mismos, sino con aquellos á que deban su origen.

Se dijo en el alegato de bien probado:

«Si es exacto que el demandado presentó para
 » obtener la posesion un testamento de D. José Va-
 » rela, otorgado en 26 de Febrero de 1798; si lo es que
 » se apellidó poseedor de los vínculos, y á su madre
 » sucesora en ellos, iban entonces guiados sus pasos
 » por un espíritu de mala fé, porque mas de un tes-
 » tigo declara sobre la notoriedad de los hechos que
 » hemos articulado al fólío 174. D. Juan de Posada
 » Argüelles, D. Francisco de Posada Porrero, D. Juan
 » Romano Merino, D. Joaquin Gonzalez, D. Lorenzo
 » Sordo, D. Juan Balmori, D. Roque Galguera y Don
 » Ramon Balmori deponen, unos de ciencia propia, y
 » otros *por haberlo oido de público*, que se habia liti-
 » gado sobre la posesion de los bienes á principios del

» siglo; que se pronunciara sentencia favorable á las
 » pretensiones de *un ausente en América*; y todos re-
 » petian que á este, ó á sus descendientes, correspon-
 » dian los bienes. ¿Ocultábase al demandado lo que
 » estaba en la conciencia de todos? Sería necesario que
 » para su uso particular y para tranquilidad de su
 » espíritu se hubiese creado el justo título, de que ca-
 » rece, y que hubiera dado cuerpo á la ficcion que se
 » imaginara. Nadie, como el detentador, sabe que lo
 » es; nadie, como D. Antonio María, que retiene sin
 » derecho los bienes, que disputa á los demandantes;
 » y que en justicia y en conciencia procede su resti-
 » tucion con los frutos y rentas. Fuese ó dejase de ser
 » auténtico el certificado de los fóllos 105 y 106, es lo
 » cierto que por sí no constituye un justo título para
 » entrar en posesion. Repetimos lo que en otro lugar
 » hemos dicho: con él se acreditaria el hecho de haber
 » entrado en el disfrute, la fecha del primer acto de
 » una detentacion. Por lo demás, la posesion en los
 » bienes vinculares se trasmitia de sucesor en sucesor
 » por el ministerio de la ley. Esa es la razon de que
 » D. Diego de Castro hubiese recibido en representa-
 » cion de su muger los bienes con frutos y rentas.
 » Por eso, y porque D. Antonio María entró sin título
 » en el goce de bienes, que no le pertenecen, á sa-
 » biendas de que sus dueños eran los herederos de
 » D.^a María Tomasa, y siendo público y conocido de
 » él, mas que de ningun otro, debe ser condenado de
 » la manera que en la demanda se solicita.»

Dejando aparte todo lo referente á filiacion, que
 fué objeto de nuestro primer capítulo, y, por consi-
 guiente, tomando en cuenta la posesion de hecho,

que es lo único que puede alegar, y lo que en realidad alega D. Antonio María Argüelles ¿le bastaría tenerla en 30 de Agosto de 1836 para adquirir el dominio de los bienes antes vinculados? La posesion se convirtió en propiedad por efecto de la ley de 11 de Octubre de 1820, y natural era que este cambio se obrase á favor del *poseedor*, que no debe ser confundido con el tenedor ó detentador.

El objeto político y económico de la desamortizacion no podia ser otro que dejar en libre circulacion la riqueza; que restituir al derecho comun lo que fuera de él estaba, y llevar la igualdad al seno de la familia, que se hallaba desnaturalizada por tan irritantes como ruinosos privilegios. Con esta tendencia, con este pensamiento, que es el de toda la ley, habian de estar en consonancia todas sus disposiciones: tratar de darles una estension, que no consiente su espíritu, seria traspasar sus límites, y, sobre todo, cuando fuese para consagrar una injusticia. Pues qué ¿no lo seria el que la detentacion se convirtiese en dominio? Cuando la ley se refiere á los que en 1836 fueran actuales poseedores, debe entenderse que lo eran aquellos á quienes por ministerio de la ley se habia transmitido la verdadera posesion.

No desconocemos que algun respetable jurisconsulto ha sostenido otra opinion. Pero sobre la autoridad de D. Joaquin Francisco Pacheco, y de cuantos le siguieron en la interpretacion de la ley de 11 de Octubre, están la recta razon, el buen sentido, y últimamente las declaraciones del Tribunal Supremo.

Con arreglo al artículo segundo de la ley citada,

pudieron los que se hallaban en posesion disponer desde luego de la mitad de los bienes. Y como en ella se decia: *los poseedores actuales..... podrán desde luego disponer de la mitad de los bienes etc.*, se supuso que esto significaba tanto como que los *tenedores* de los bienes en 30 de Agosto eran los propietarios. De ese modo el legítimo poseedor, que hubiese sido despojado un año antes, un día, algunas horas, habria quedado privado de todos sus derechos; lo cual repugna y es inconcebible.

Se hace uso de la palabra *actuales*, despues de la de poseedores, porque los bienes se distribuyeron entre los que entonces lo eran y los que habrian de serlo inmediatamente despues, *si los mayorazgos subsistiesen*. Por esta razon se distinguieron unos de otros, llamando á los primeros *actuales* y á los segundos *inmediatos*, estableciendo que los primeros podian disponer de su mitad desde luego, y los segundos cuando entrasen en posesion. Se respetaron las *espectativas y los derechos de actualidad*, y al hablar del sucesor inmediato, ó de aquel *que debia suceder inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese*, claramente se determinaba que la ley favorecia á los legítimos poseedores. Otra cosa no habia de ser, puesto que la posesion vincular se convertia en propiedad como compensacion, y por lo tanto á beneficio de quien tuviese la primera. Del mismo modo nos pareció que lo comprendia Don Antonio María Argüelles, porque, sin embargo de sostener lo contrario, á la vuelta del fólío 327 dijo, impugnando la eficacia de la sentencia de 1800: que á los demandantes *perteneceria la propiedad de los bienes disputados con mejor derecho que el que asiste á*

D. Antonio María Argüelles, si se les declarase en línea y grado preferente; luego el hecho de estar en material tenencia de los bienes en 30 de Agosto de 1836 no podia bastar para decidir la cuestion á su favor.

En nuestro humilde concepto, la interpretacion que damos al artículo segundo y á todos los de la ley de 11 de Octubre, ha pasado á ser doctrina inconcusa, uno de los puntos de nuestra jurisprudencia, que no admite discusion. El Tribunal Supremo ha fijado en repetidas sentencias la recta significacion de las palabras que estamos analizando, y seria muy pálido cuanto añadir pudiéramos á los razonados considerandos de alguna de ellas.

La primera es de 14 de Diciembre de 1848. Disputábase sobre la incompatibilidad para retener tres mayorazgos, y se escepccionaba que, segun el artículo segundo de la ley mencionada, el que era poseedor de todos tres en Agosto de 1836 habia adquirido el dominio de los bienes. El Tribunal Supremo dijo, que la ley no habia privado *de su derecho á los terceros que lo tuvieran preferente al de los poseedores actuales*. Lacónico estuvo entonces, aunque bastante esplicito.

Mas razonados, mas contundentes é irrefutables son los fundamentos de la de 23 de Mayo de 1855. Está inserta en la coleccion legislativa de ese año con el número seis. S. A. planteó la cuestion en el terreno de la conveniencia, de la justicia y de la constitucionalidad; y de lógicos é incontestables razonamientos dedujo, que era forzoso convenir en que la ley se concretó á los poseedores *que debian serlo, si*

subsistiese el mayorazgo, ó lo que es lo mismo, segun la voluntad del fundador (1).

Fué menester que por tercera vez se consignase una jurisprudencia tan en armonia con la equidad y con los principios estrictos del derecho. Nuevamente se llevó la misma cuestion al Tribunal Supremo, y nuevamente reprodujo *que la ley de 11 de Octubre de 1820, al suprimir las vinculaciones, respetó los derechos adquiridos por los actuales poseedores, que lo eran de derecho ó debian serlo, con arreglo á la fundacion, lo mismo que si aquellos subsistiesen*; sentencia de 6 de Abril de 1861, inserta en la *Gaceta* de 10 siguiente.

(1) «Considerando que esta compensacion, por lo que
 » hace á los inmediatos sucesores, se dió manifiestamente, no
 » á los que al tiempo de publicarse la ley tenian de derecho,
 » ó solo de hecho, el carácter y el nombre de tales, sino á los
 » que lo eran de derecho, puesto que en el artículo 2.º de la
 » ley se reservó la mitad de los bienes *al que debia suceder in-*
 » *mediatamente en el mayorazgo, si subsistiese*, que es evidente
 » no podia ser otro sino el inmediato sucesor de derecho; esto
 » es, el que debia serlo segun la fundacion:

»Considerando que si esto no puede ser dudoso para nadie,
 » tampoco admite duda que la ley quiso hacer otro tanto con
 » respecto á los poseedores actuales, siendo forzoso convenir
 » por ello en que se concretó á los que *debian serlo si subsis-*
 » *tiese el mayorazgo, ó lo que es lo mismo, segun la voluntad*
 » del fundador:

»Considerando que para entender materialmente la ley en
 » esta parte, suponiendo que no se quiso concretar á los po-
 » seedores de derecho, sino que se estendió á todos los que á
 » su promulgacion lo eran en realidad de derecho ó de hecho,
 » seria preciso atribuirle la mas repugnante inconsecuencia
 » en exigir la cualidad de derecho á los inmediatos sucesores
 » y á los poseedores actuales, sin embargo de estar neces-
 » rariamente unos y otros en idéntico caso, seria preciso además
 » tacharla de absurdamente injusta, puesto que dando una
 » compensacion al poseedor actual de hecho, que nada perdia

Esto es lo que se viene observando en cuantos casos se han presentado, y de que tenemos noticia. Ni el Derecho ni la Ciencia Económica podían aconsejar que el poseedor legítimo fuese espoliado en obsequio de un detentador: tampoco las reglas de interpretación podían señalar otro derrotero á la prudencia de los tribunales.

Después de lo que dejamos espuesto, ningún inconveniente habría en pasar en silencio lo que se alega con referencia al artículo 8.º de la ley citada. Claro es que si el derecho de los poseedores fué respetado se les había de reconocer acción para hacerlo valer; y no por el limitadísimo tiempo de cuatro meses, sino en armonía con los principios generales. Para evitar dilaciones maliciosas, para que las antiguas acciones vinculares, pendientes entonces de la resolución de los tribunales sobre tenuta ó posesión, no permaneciesen en incertidumbre por un tiempo indeterminado, respecto de los mismos entre quienes

» con la desvinculación, se le negaba al poseedor de derecho,
 » para quien la había destinado, por ser entre los poseedores
 » el único que perdía con aquella un derecho legítimo: sería
 » preciso también conceder á las Cortes de 1820 que la decre-
 » taron, una superioridad que no tienen, ni podían tener sobre
 » la Constitución de 1812, vigente entonces, atendidos los ar-
 » tículos 117, 375 y 376 de la misma; y que en consecuencia
 » les era lícito prescindir, suprimiendo derechos legítimos sin
 » compensación, de su artículo 4.º donde solemnemente se de-
 » claraba á la Nación «obligada á conservar y proteger por le-
 » yes sábias y justas *los derechos legítimos de todos los individuos*
 » *que la componen:*» sería preciso, en fin, colocar la disposición
 » de la ley que nos ocupa en el terreno de la inconstituciona-
 » lidad, de la injusticia y del absurdo contra la primera de las
 » reglas de la interpretación que lo prohíbe.» Sentencia dic-
 tada.

las cuestiones se estuviesen ventilando, se dispuso que, de no entablarse demanda sobre la propiedad en el término de cuatro meses despues de notificada la sentencia, el tenutario ó poseedor seria considerado como propietario. Esta prescripcion habrá sido mas ó menos conveniente, y sin dificultad concedemos que lo fué; pero se limitó á casos que están bien determinados. Era menester que entonces, á la publicacion de la ley, estuviesen *pendientes* los juicios, en que las sentencias hubieran de pronunciarse. Los que cuestionaban sobre derechos vinculares debian terminar de una vez sus contiendas: asi lo quiso la ley. No habia la misma razon para que terceras personas, cuyos derechos tal vez permanecerian ignorados, quedasen espuestas á la caducidad de sus acciones dentro de tan breve plazo.

Va mas allá todavia el demandado. Admitiendo en hipótesi los fundamentos de la demanda, dice que esta no se ha entablado de modo que pueda decidirse quién sea el que mejor derecho tenga; que este pleito se debiera seguir á semejanza de los de mayorazgo; y que, no habiendo planteado la cuestion como procedia, se encuentra preparada la absolucion.

A semejanza de las antiguas acciones vinculares no habian de ejercitar la suya los demandantes; porque han desaparecido, y en su compensacion, creando la ley otros derechos, dió origen á las acciones correspondientes á estos, que son distintas de las anteriores. Se pide la restitucion del dominio, porque en tal se convirtió la posesion vincular; y se apoyan los demandantes en que á ellos tocaba de derecho, como legítimos descendientes de D.^a María Tomasa de Po-

sada, declarada sucesora en sentencia ejecutoria. Si pues D. Antonio Maria Argüelles anhelaba discutir sobre los derechos respectivos, acerca de quien, subsistiendo los mayorazgos, habria de ser el poseedor llamado en las fundaciones, ocasion tuvo de reconvenir á mis poderdantes, y de esforzar esas razones, que tan cuidadosamente reserva, para anteponerse á los que encuentran un sólido apoyo en la sentencia de 10 de Diciembre de 1800.

Pero todas estas escepciones no le parecieron bastantes, y se acoge por último á los medios de defensa, que ordinariamente ponen en juego todos aquellos que en realidad ningun medio de defensa tienen, Alega en su favor la prescripcion, de que nos vamos á ocupar en la

PARTE FINAL.

Desde el 30 de Agosto de 1836 son libres los bienes, que antes estuvieron sujetos á vinculacion, y prescriptibles en su consecuencia. D. Antonio María Argüelles estuvo tranquilamente en posesion por mas de 20 años desde la fecha anterior; luego ganó el dominio por este medio. (1).

(1) En el escrito de contestacion á la demanda escepcionó D. Antonio María Argüelles que *habria adquirido la propiedad de la mitad de los bienes vinculados*, dado que no fuese legítimo sucesor; y que su hijo primogénito *podria tambien alegar eficazmente la prescripcion* DEL DERECHO de recibir la mitad de los

Así discurren sus defensores, con quienes en la parte sustancial ningún reparo tenemos en estar de acuerdo. Las fincas vinculadas, mientras tuvieron esta cualidad, pasaban de sucesor en sucesor por ministerio de la ley, y en más de una ocasión se ha declarado que el trascurso del tiempo nunca sancionaba su detentación. Esta proposición, que tomamos de uno de los escritos contrarios, sobre ser indiscutible, tiene importancia, y mucha, como luego veremos. Quedaron sujetos á las disposiciones del derecho común, después del restablecimiento de la ley de 11 de Octubre de 1820. Pero, si bien es cierto que pueden ganarse *por tiempo de 10 años, seyendo en la tierra el Señor de ellas—ó 20 seyendo en otra parte—*, es necesario que concurren las circunstancias *de poseerlos con buena fé y justo título*, como tiene establecido la ley 18, título 29 de la Partida 3.^a, y se declara en la sentencia de 20 de Noviembre de 1860, citada por el adverso.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, á que diariamente se recurre en todas las cuestiones de esta naturaleza, ha determinado con precisión y claridad, cuándo el dominio de los bienes, que fueron vinculados, se puede ganar por prescripción, y cuándo llegará á extinguirse la acción para reivindicarlos, dado

bienes que la ley le reserva. Replicando, preguntábamos si la esperanza equivalía á la realidad de la posesión; si el PRESUNTO inmediato sucesor tenía algún título para prescribir derechos, que miraba en lontananza, y que muy bien podrían ser para otro, cuya desgracia no le deseábamos.

Más tarde se desentendió del *presunto* sucesor, y viene suponiéndose poseedor de todos los bienes, en concepto de propietario

que lo primero no suceda por defecto de buena fé y justo título. En sentencia de 25 de Junio de 1859, se ha dicho que la accion reivindicatoria para reclamar las fincas, antes de mayorazgo, tiene de duracion 30 años, que empezaron á correr en 30 de Agosto de 1836. Y en otras, que ha citado el contrario, por concurrir buena fé y justo título en terceros que no eran poseedores de hecho al restablecimiento de la ley de desvinculacion, sino adquisidores de buena fé, se ha declarado prescripto el dominio despues del lapso de 10 años entre presentes. ¿En cuál de los dos casos se encuentra D. Antonio María Argüelles? ¿Puede alegar en su favor la prescripcion? De ningun modo. Al restablecimiento de las leyes desvinculadoras eran poseedores de derecho mis representados, ó sus causantes, y una usurpacion el disfrute, que ahora pretende utilizar el demandado para justificacion de sus pretensiones. Como lo que es nulo en su origen con el tiempo no convalece, la detentacion, que no cambió ni podia cambiar de aspecto con la ley de 11 de Octubre, continúa hoy con el mismo carácter que antes. El defecto de título, pues, el no ser poseedor en 1836, y su manifiesta mala fé colocan á D. Antonio en la imposibilidad de adquirir las fincas por prescripcion.

Pero sus defensores, que con destreza reconocida saben tomar la proposicion, que ha de demostrarse, como principio de demostracion, dicen que concurre en él un justo título: el de sucesion vincular. ¿Cuándo se le ha declarado sucesor? Si en él se verificaron los efectos de la ley de 11 de Octubre ¿para qué necesitaba el trascurso de mayor ó menor número de años

desde 1836? Le bastaria haber sido verdadero poseedor para que se le tuviese por dueño, sin necesidad de otros requisitos. La pretendida sucesion vincular seria mas que suficiente medio de defensa. Pero, como no hay tal, como D. Antonio María Argüelles se apoderó de los bienes *sin razon derecha*, sin justa causa, sin título para ello, detentador era antes de 1836, y detentador es en la actualidad. Evidenciado está que por virtud de la ley de 11 de Octubre ningun derecho adquirieron los que solo eran poseedores de hecho; que en sus disposiciones no hay razon para fundar una causa traslativa de dominio, que no existe; y que, si bien las fincas antes amayorazgadas se redugeron á la clase de absolutamente libres, no por eso el que carecia de título lo adquirió por la desvinculacion, ni tampoco su mala fé se trocó en buena. El demandado para justificar su escepcion habria, por consiguiente, necesitado acreditar que poseia en virtud de un justo título, *posterior al 30 de Agosto de 1836, porque, si alguno hubiese tenido anterior, que se opusiera á la trasmision vincular, de ningun efecto seria.*

No abona su oposicion el que nos diga, que poseia á título de propietario. Sus equivocadas creencias debian descansar sobre un justo título, que es lo que le falta. Debiera probar que habia *entrado con derecho* en las fincas que se le demandan, para fundar la prescripcion: y por faltarle ese requisito, por constarle, como á todos los testigos de nuestra prueba, que los vínculos, á cuya restitucion fuera condenado Don José Varela, pertenecian á uno ó mas ausentes en América, no hay posibilidad de que se declare haber tenido lugar la prescripcion del dominio.

Respecto al tiempo que tarda en extinguirse la accion reivindicatoria, ejercitada por los demandantes, ni se ha puesto en duda que sea el de 30 años, ni era de esperar, atendiendo á lo que terminantemente está dispuesto, y á las declaraciones de S. A. el Tribunal Supremo (1).

A la vez que con las precedentes reflexiones queda impugnada la cuarta escepcion de los demandados, hemos demostrado que D. Antonio María Argüelles, con arreglo á la ley 40, título 28, Partida 3.^a se halla en la obligacion de restituir los bienes con los frutos producidos, y que hayan debido producir, por haber entrado en ellos sin derecho (2).

Reasumiendo, para concluir, tenemos:

Que la sentencia de 1800 es ejecutoria contra Don Antonio María Argüelles;

Que en todo caso D.^a María Tomasa de Posada, á

(1) «Considerando que la prescripcion establecida en la » ley 21, título 29, Partida 3.^a no es aplicable, segun la juris- » prudencia constante, á los bienes que fueron vinculados » mientras tuvieron esta cualidad; que por consiguiente no » puede correr en perjuicio de ellos sino desde el 30 de Agosto » de 1836, en que se restablecieron las leyes desvinculadoras, » y que, aun contando la prescripcion desde entonces, no se » han cumplido los 30 años, que la misma ley de Partida re- » quiere para extinguir la accion reivindicatoria, que se ha » ejercitado, por todo lo cual no puede reputarse infringida.» Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Junio de 1859, inserta en la *Gaceta* de 8 de Julio.

(2) «A mala fé ganan los omes heredades, é otras cosas en » dos maneras. La primera es quando furtan la cosa, ó la ro- » ban, ó *la entran sin derecho*. E estos atales si fuessen venci- » dos en juizio son tenudos de tornar la heredad con los frutos » que ende llevaron, é aun con los que pudiera ende llevar » el señor de la heredad.» Ley 40, título 28, Partida 3.^a

quien se declaró legítima sucesora, tenía el indisputable derecho de poseer las vinculaciones, mientras otro no fuese declarado sucesor con mejor derecho;

Que en el mismo caso se encuentran sus descendientes y herederos;

Que estos lo son indisputablemente los demandantes;

Que á ellos, por ministerio de la ley, ó á sus causantes se transmitiera la posesion vincular, antes del restablecimiento de la ley de 11 de Octubre de 1820;

Que en ellos se realizaron los efectos de la desvinculacion, como poseedores de derecho, y no en Don Antonio María Argüelles, que es y era un detentador;

Que adquirieron, en su consecuencia, como compensacion, el dominio de los bienes en cambio de los derechos vinculares, que se suprimieron;

Que, sin embargo de haberlos detentado el demandado desde 1836, no los adquirió por prescripcion, puesto que no entró en su disfrute por virtud de un justo título y con buena fé;

Que tampoco prescribió la accion real que asiste á mis representados, porque tiene de duracion 30 años, que empezaron á correr en 30 de Agosto de 1836;

Y, por último, que con los bienes debe restituir D. Antonio María los frutos, que sin título alguno utilizó y con mala fé.

Suplico á V. E., en virtud de lo espuesto, se sirva hacer y determinar como dejo pretendido, teniéndome por conforme con el apuntamiento. Oviedo Junio 17 de 1863.—*Lic. Manuel Pedregal y Cañedo.*—*Cristino Gonzalez de la Fuente.*

ARBOL GENEALOGICO

